



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0329/2017

FECHA: 24 de noviembre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0329/2017 presentada por [REDACTED], Presidente de la Asociación Vecinal Nuevo Bercial-NUBER, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN:**

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han motivado la presente reclamación tienen su origen en un escrito registrado en el Ayuntamiento de Getafe -Madrid- el 10 de enero de 2017 por el ahora recurrente en el que, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno - desde ahora, LTAIBG- planteó una solicitud de acceso a la información sobre *contrataciones públicas con una serie de entidades mercantiles*.

Con posterioridad, a través de un escrito registrado en el Ayuntamiento de Getafe el 30 de enero de 2017, planteó al amparo de la LTAUIBG una nueva solicitud de acceso a la información con la finalidad de obtener *relación de contratos realizados por el Ayuntamiento de Getafe, Getafe Iniciativas S.A.M (GISA), Agencia Local para la Formación y el Empleo (ALEF), Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) y Limpieza y Medio Ambiente de Getafe S.A.M (LYMA) cuyo contenido sea la prestación de cualquier tipo de servicio jurídico, incluido el del asesoramiento legal de cualquier índole desde el año 2014, incluyendo en la misma los adjudicatarios de los mimos y el número*

ctbg@consejodetransparencia.es



de empresas profesionales consultados para su contratación, así como las cantidades económicas abonadas por estos servicios constando en la relación el asesoramiento jurídico propio existente en cada entidad.

Al no obtener contestación a estas solicitudes de acceso a la información, mediante escrito registrado en el Ayuntamiento de Getafe de 21 de julio de 2017 se reiteran las solicitudes indicadas. Finalmente, al transcurrir el plazo aludido en el artículo 24.2 de la LTAIBG sin haber recibido contestación alguna a las solicitudes de referencia, el interesado las entiende desestimadas por silencio administrativo y, en consecuencia, mediante registrado en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 24 de agosto de 2017 interpone una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG.

2. Por escrito de 25 de agosto de 2017 de la Oficina de Reclamaciones Territoriales de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se traslada el expediente de referencia al Ayuntamiento de Getafe a fin de que, por el órgano competente y en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimen por conveniente, remitiéndolas a esta Institución, así como toda aquella documentación en la que fundamentar las alegaciones formuladas.

Mediante escrito de la Concejal Delegada de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo Económico y Atención Ciudadana registrado en esta Institución el 17 de octubre de 2017, se trasladan a esta Institución, en breve síntesis, las siguientes consideraciones:

- Por informe de la Unidad de Administración Electrónica y Transparencia de 28 de septiembre de 2017 se concluye que la reclamación se ajusta a lo dispuesto en los artículos 20 a 24 de la LTAIBG al haberse producido la desestimación presunta de la solicitud de acceso. La información correspondiente a las entidades del sector público municipal deberá ser facilitada por ellas, a las que se remitirá la solicitud efectuada.
- La entrega de la información solicitada perteneciente al Ayuntamiento no vulnera, en el caso de referirse a personas jurídicas, los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTIBG; los datos identificativos correspondientes a personas físicas se considera que deberán ser disociados.
- Se estima que procede informar favorablemente la reclamación presentada y tramitar y resolver a la mayor brevedad su solicitud de acceso a la información, para así subsanar la falta de respuesta inicial en plazo. Todo ello con independencia de la tramitación y resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre la reclamación, al que se dará cuenta de la resolución que se dicte.



II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones de la LTAIBG el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 LTAIBG -BOE, n.13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. La primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención consiste en delimitar el ámbito subjetivo de la presente reclamación. En efecto, tal y como se deduce de las originarias solicitudes de acceso a la información, las mismas afectan a distintos sujetos, circunstancia que nos obliga a examinar con carácter



preliminar su vinculación o no a la LTAIBG. En este sentido no cabe duda alguna que el Ayuntamiento de Getafe se trata de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la LTAIBG por obra del artículo 2.1.a) de dicha Ley.

Por otra parte, de acuerdo con la información contemplada en el Inventario del Sector Público Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, [disponible en el sitio <https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/BDGEL/asp/DatosEnte.aspx>], por una parte, la entidad Agencia Local para la Formación y el Empleo (ALEF) se trata de un Organismo Autónomo Local mientras que, por otra parte, las entidades Getafe Iniciativas S.A.M (GISA), Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) y Limpieza y Medio Ambiente de Getafe S.A.M (LYMA) se configuran como Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas Empresariales de capital mayoritariamente público. En función de su naturaleza cabe concluir que todas ellas se tratan de entidades incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTAIBG en función de lo previsto en las letras c) y g) del artículo 2.1 de la LTAIBG.

4. En cuanto al fondo del asunto planteado en la presente reclamación cabe comenzar recordando que el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en cuanto atañe al concepto de “información pública”, ésta se define con detalle y extensamente en el artículo 13 de la LTAIBG como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

La materia sobre la que versan las dos solicitudes de acceso a la información desatendidas por la administración municipal y sus entes instrumentales -contratos de las Administraciones Públicas-, no cabe albergar duda alguna que se trata de “información pública” a los efectos de la LTAIBG, dado que en ella se cumplen los dos requisitos requeridos por el artículo 13 de dicha Ley para disfrutar de tal naturaleza. Por una parte, se trata de información elaborada en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Corporación municipal y demás entes del sector instrumental local si atendemos a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Y, por otra parte, se trata de información elaborada por una Corporación municipal, un organismo autónomo y sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales de capital mayoritariamente público, sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la LTAIBG a tenor de lo dispuesto en las letras a), c) y g) del artículo 2.1 de la citada Ley.

De acuerdo con esta premisa, según se desprende del artículo 5.1 de la LTAIBG, desde el 10 de diciembre de 2015 los Ayuntamientos y demás entidades integrantes de su sector instrumental están obligados a publicar “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. De este modo, la información relativa a la contratación constituye una información de carácter económico o presupuestario





de las previstas en el artículo 8.1.a) de la LTAIBG que debe ser publicada de oficio por las entidades enumeradas en las letras a), c) y g) de su artículo 2.1. En atención a ello, el artículo 8.1 de la LTAIBG prevé que los Ayuntamientos, Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas Empresariales de capital mayoritariamente público “deberán hacer pública, como mínimo”, a través de alguno de los medios previstos en el artículo 5.4 de la LTAIBG “la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria· relacionada con

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente.

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.

A mayor abundamiento, cabe advertir que el cumplimiento de esta obligación de publicidad activa por los sujetos enumerados en las letras a), c) y g) del artículo 2.1 de la LTAIBG no excluye, desde luego, que cualquier persona pueda solicitar el acceso a esa información a través del ejercicio del derecho de acceso a la información regulado en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG. En este caso, la administración puede remitir al solicitante bien la concreta dirección URL en la que se encuentra publicada la misma, o bien copia de la información contractual de que se trate. En el caso que ahora nos ocupa, ni la administración municipal ni los reiterados entes del sector instrumental han utilizado ninguna de las dos vías para contestar al solicitante de la información.

En virtud de lo expuesto en este Fundamento Jurídico ha de estimarse, en cuanto al fondo, la Reclamación interpuesta.

5. No obstante lo anterior, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera conveniente formular alguna consideración, desde una perspectiva formal, a propósito de las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Dicha reglas se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20.1, en lo que atañe a la resolución de las solicitudes de información que,

“La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.



Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”.

Mientras que, por su parte, el apartado 4 del mismo artículo dispone lo siguiente:

“Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”.

De este precepto se deducen dos consideraciones. La primera consiste en que existe una regla procedimental específica aplicable a aquellos casos de considerables solicitudes de información en atención a su volumen o complejidad. De este modo, en el párrafo segundo del artículo 20.1 de la LTAIBG se prevé que cuando concorra el supuesto de hecho de que “el volumen o complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”, la consecuencia jurídica será que la administración pública que ha de resolver la solicitud de acceso a la información tiene la posibilidad de ampliar el plazo de un mes del que dispone para dictar y notificar la resolución por otros mes adicional. La administración municipal y los distintos entes de su sector instrumental, en el caso que ahora nos ocupa, no aplicaron la ampliación del plazo acabada de reseñar, tal y como se desprende de los antecedentes obrantes en el expediente, de modo que disponían de un mes para dictar y notificar la resolución en materia de acceso a la información contractual solicitada.

La segunda consideración que se deriva del precepto de referencia consiste en que el precitado artículo vincula el comienzo del cómputo de plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En el presente supuesto, según se desprenden de los antecedentes, las fechas de presentación de solicitudes fueron el 10 y el 30 de enero de 2017, de modo que el órgano competente de la administración municipal disponía de un mes para dictar y notificar las correspondientes resoluciones desde aquellas.

Según consta en el expediente, el Ayuntamiento de Getafe no ha resuelto en la fecha en que traslada a esta Institución las alegaciones de ambas solicitudes de acceso a la información. Con ello, se quiere poner de manifiesto que, desde una perspectiva formal, ha incumplido el plazo de un mes del que dispone para facilitar la información al ahora reclamante.



III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada, en tanto que su objeto se configura como información pública a los efectos del artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Getafe a que en el plazo máximo de diez días hábiles proporcione al ahora reclamante la información solicitada y no satisfecha, remitiendo a este Consejo, en igual plazo, copia de la información suministrada al reclamante que acredite el cumplimiento de la misma.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
P. V (ARTÍCULO 10 DEL REAL DECRETO 919/2014)

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda

